

# Las Normales Rurales: noventa años de lucha y resistencia

Tatiana Coll\*

La vida y las luchas de las Normales Rurales forman parte indisoluble de la tenaz pelea de los campesinos pobres de México a lo largo del siglo xx y xxi. Nacieron con la Revolución Mexicana junto con el reparto de la tierra y la formación de los ejidos. Después, durante setenta años han enfrentado y resistido las constantes transformaciones contrarrevolucionarias que llevaron hasta el desmantelamiento de la esencia del Artículo 27 constitucional, momento definitivo de la reprivatización y mercantilización de la tierra, proceso que se reflejó hacia las Normales Rurales, a final de cuentas, en la famosa frase de la corrupta y cínica Elba Esther Gordillo, cuando señaló que para lo único que servían era para convertirlas en escuelas de turismo.

Nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.

Gabriel García Márquez

La primera Normal Rural fue fundada en 1922 en Tacámbaro, Michoacán, por el primer responsable de la naciente Secretaría de Educación Pública, José Vasconcelos, como parte del programa de crear Escuelas Centrales Agrícolas que impulsaran la formación de maestros campesinos. Poco después fue transferida a otros municipios, hasta que en 1949 quedó finalmente asentada en Tiripetío, en el casco de la ex hacienda de Coapa, un bello y señorial edificio central de

dos pisos de ladrillos rojos, con grandes arcadas y pasillos: uno de los más imponentes entre los viejos cascos de hacienda que fueron destinados para ser sedes de las Normales Rurales, como simbólica referencia al reparto agrario realizado por la Revolución Mexicana y el esfuerzo por llevar educación al campesino, y no sólo tierras.

Prácticamente desde su creación en los años veinte y durante los años treinta, las Normales Rurales —concebidas sobre todo por el Cardenismo como una parte integrante de la Reforma Agraria y del proceso de

desarrollo del campesino— fueron confrontadas por los grandes hacendados y por la Iglesia. Los curas las llamaban “las escuelas del diablo”; el clero, furibundo, amenazaba con excomulgar a las familias de los muchachos que se inscribieran, y hacían correr rumores sobre las prácticas inmorales que se realizaban en los internados.

Para la primera escuela Normal, esta guerra se intensificó cuando se instaló un seminario también en Tacámbaro; el obispo recrudecía sus ataques, por lo que acabó por trasladarse a la Normal Rural para evitar una confrontación mayor. Corrían ya

\* Investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional.

los violentos años de la Guerra Cristera, y Michoacán era un núcleo importante para los alzados católicos; eran tiempos de espanto en que, como relató José Revueltas, “Dios en la tierra” marcó su huella a sangre y fuego. En contraparte, en aquellos primeros años las Normales Rurales contaron con el apoyo decidido de un gobierno que impulsaba la educación de los hombres de la tierra, pues esto era uno de los motores centrales del cambio agrario.

A partir del régimen de Ávila Camacho los vientos cambiaron, y al mismo tiempo que se trasladó la mirada hacia el campo y se inició la contrarreforma agraria, las Normales Rurales empezaron a resultar incómodas para los gobiernos que buscaban recomponer las relaciones con los terratenientes nuevos y viejos que aún subsistían en el agro mexicano. Esto se agravó durante el periodo alemanista, que privilegió la industrialización a costa de la sobreexplotación rural; no hubo, por tanto, interés por estas escuelas de pobres para pobres. Muy pronto se empezó a llamar a los estudiantes normalistas “comunistas apátridas”, y a las escuelas “viveros de líderes rojillos”. Los presupuestos empezaron a reducirse y la política del abandono se hizo oficial; de hecho, en los años cuarenta, veinte Normales Rurales se fueron a huelga exigiendo prácticamente lo mismo que reclaman hoy: mejor alimentación, ampliación y mejoramiento de las aulas e instalaciones, material didáctico y herramientas para el campo<sup>1</sup>. Así comenzaron las movilizaciones que se siguieron desarrollando hasta los años sesenta, cuando la negligencia y el arrinconamiento por parte del gobierno se tornaron en franca agresión, decidiéndose de manera unilateral el cierre de las Normales Rurales. Es bien sabido que durante estos años, la brutalidad y la violencia de Estado era parte de la vida cotidiana; muestras de ello son los asesinatos de líderes campesinos –como es el caso de Rubén Jaramillo– o la represión constante que se ejerció contra los movimientos sociales, como ocurrió el 2 de octubre de 1968.

A partir de la mitad de los años sesenta, las Normales Rurales fueron acusadas de ser “semilleros de guerrilleros”, y tanto los funcionarios gubernamentales como los charros sindicales y la prensa sentenciaban: “si no las desaparecemos, van a seguir con lo mismo”, por lo que Díaz Ordaz cerró más de la mitad de las Normales Rurales en 1969.

Durante los años setenta, década en la que Echeverría desplegó la Guerra Sucia asesinando y desapareciendo a cientos de campesinos, estudiantes y luchadores sociales, las Normales Rurales fueron violentamente agredidas. Para ello utilizó la presencia de los maestros Arturo Gámiz, Genaro

<sup>1</sup> *Contra línea*. 12 de marzo de 2012.

Vázquez y Lucio Cabañas –luchadores sociales campesinos levantados en armas– para generalizar la idea de que en las Normales Rurales se formaban los núcleos armados de lucha guerrillera; esta es una idea que todavía hoy es repetida por algunos medios amarillistas, que mantienen así un ambiente de linchamiento hacia los estudiantes normalistas, particularmente los de Ayotzinapa.

En los años noventa, al calor de las reformas salinistas y bajo el discurso de la modernización, se hacía imprescindible acabar con estas “entelequias de un pasado populista que ya no jugaban ningún papel”; entonces la SEP comenzó a disponer el control y reducción de la matrícula y del presupuesto de manera sistemática. Hoy, en pleno siglo XXI, el ensañamiento del Estado mexicano contra las Normales Rurales persiste con la misma fuerza; no hay gobierno estatal que no se haya empeñado en lograr la desaparición de las Normales con todo tipo de medidas. Es el caso de la Normal Rural de El Mexe, Hidalgo, que en 1994 –siendo gobernador precisamente Murillo Karam, el actual procurador de justicia– se determinó una reducción significativa de la matrícula y se incurrió en todo tipo de agresiones, hasta que en 2008 se cerró definitivamente, bajo el gobierno de Osorio Chong. La Alianza por la Calidad de la Educación, de corte “calderonista-gordillista”, y la actual reforma educativa de Peña Nieto, específicamente la Ley del Servicio Profesional Docente<sup>2</sup>, aportaron un elemento nuevo: el cierre total del acceso a las plazas de maestros, aún cuando el campo mexicano está sembrado de frágiles escuelas multigrado y/o unitarias<sup>3</sup> donde hacen falta cientos de maestros.

La permanente resistencia de los estudiantes normalistas, desplegada en todos estos años, demuestra claramente el grado de responsabilidad social que tienen al luchar

<sup>2</sup> El Servicio Profesional Docente que se aprobó en 2013 como parte de las leyes secundarias de la Reforma Educativa de Peña Nieto establece un estado de excepción laboral para los maestros al determinar las condiciones específicas que deben prevalecer para el ingreso al magisterio mediante concurso de oposición, la permanencia en la plaza mediante evaluaciones universales, y promoción y/o estímulo por el trabajo mediante otro sistema de evaluación, lo cual eliminó la condición específica de las Normales Rurales, que consistía en otorgar plazas a los egresados de las escuelas rurales, para lo cual habían sido preparados en estas Normales. Véanse los artículos de Luis Hernández, Hugo Aboites, César Navarro y Tatiana Coll (2011, 2013, 2014).

<sup>3</sup> Todas las estadísticas educativas disponibles –particularmente las del INEE– señalan que el 43% de las escuelas en el país son multigrado y/o unitarias; es decir, que están organizadas en una sola aula con un maestro que imparte a niños de diferentes edades los grados que alcanza a establecer, o bien, dos aulas con dos maestros que se dividen a los niños para impartir los diferentes grados. El porcentaje de estas escuelas en el campo es mayor; su precariedad y abandono es enorme.

contra las diversas medidas que apuntan siempre al cierre de sus escuelas, las cuales siguen cumpliendo una función social importante en medio de las condiciones de empobrecimiento y ruina que prevalecen en el campo mexicano. A estas últimas se añaden el envilecimiento y descomposición por parte de las fuerzas locales, estatales y nacionales, tanto públicas como privadas, coludidas con el crimen organizado. El pavoroso caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, los tres asesinados y torturados, y las otras tres personas que fueron asesinadas porque las confundieron con estudiantes, da cuenta de que ha escalado, de manera siniestra, la agresión hacia las Normales Rurales; se ha llegado a perpetrar un crimen de Estado en esta obsesiva carrera del gobierno contra las Normales Rurales. En este propósito se encuentran incluidas todas las autoridades locales, estatales y nacionales, que no atinan a presentar una explicación o acciones coherentes y responsables.

Por lo menos tres de los actores centrales del gobierno federal que tienen la responsabilidad de hacer justicia frente a este crimen –Murillo Karam, Osorio Chong y el propio Peña Nieto– confrontaron y agredieron a las Normales Rurales cuando fueron gobernadores de Hidalgo y del Estado de México, respectivamente. Es también un crimen de Estado porque ha habido, durante los últimos setenta años, una permanente embestida contra las 17 Normales Rurales que sobreviven; es un ataque organizado y compartido con todas las autoridades e instituciones gubernamentales de diversos niveles, desde la Presidencia, la SEP y los gobiernos estatales y locales, hasta el propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación –particularmente la cúpula espuria– con el apoyo mediático comprometido de las televisoras.

## **El asalto a las Normales del “Tiri”, Cherán y Arteaga en Michoacán**

El 15 de octubre de 2012, muchos periódicos alcanzaron todavía a insertar la noticia en primera plana: “Desalojan Escuelas Normales en Michoacán”. Elementos de las Policías Estatales Preventivas y Federales, así como el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) tomaron por la fuerza y desalojaron las Normales de Tiripetío, Cherán y Arteaga en Michoacán. Pasadas las 12 de la noche, un numeroso contingente de más de 800 elementos policiacos se movilizó hacia las tres Normales en el estado de Michoacán, y después de fuertes enfrentamientos con los estudiantes lograron tomar el control de los edificios. En las Escuelas Normales se encontraban los diferentes tipos de vehículos

que los estudiantes mantienen a resguardo en sus instalaciones, como parte de la presión que ejercen sobre el gobierno estatal. El conflicto incrementó por el rechazo al pliego petitorio de los estudiantes y por la ruptura del diálogo. Se han reportado más de cien estudiantes detenidos, algunos heridos y golpeados, cuatro autobuses y patrullas incendiadas. María Teresa Herrera, la delegada de la SEP en el estado, acusada recientemente por los estudiantes de haberse metido a la Normal de Tiripetío a revisar los casilleros y las pertenencias de los estudiantes, declaró que esta acción respondió a “la urgente necesidad de limpiar la casa a profundidad, ya que, en el mejor de los casos, las Normales Rurales se han desvinculado de su entorno social y educativo para convertirse en lugares con otros intereses muy diferentes”. Estas fueron, a grandes rasgos, las notas periodísticas que dieron cuenta de los hechos.

¿Cuál era el grave conflicto que ameritaba esta decisión? ¿Cuáles eran esos “intereses muy diferentes” que apuntó la delegada de la SEP? De acuerdo con documentos de los normalistas, desde principios de marzo de 2012, los estudiantes habían iniciado una serie de reuniones con las autoridades educativas del estado para tratar, como cada año, los puntos relativos al aumento de matrícula de ingreso, respeto a los términos establecidos y emisión de la convocatoria correspondiente para el nuevo ciclo escolar, aumento del presupuesto y finalmente revisión de las recientes adecuaciones al plan curricular que se estableció por igual, y de manera unilateral, para todas las Normales, “homogeneizando la formación cuando las Normales tienen perfiles diferentes y se pretende aplicar a rajatabla”.

El proceso se interrumpió cuando la delegada de la SEP se introdujo subrepticamente en la Normal de Tiripetío; los estudiantes la desconocieron y exigieron hablar con el gobernador del estado, Fausto Vallejo. En respuesta, el 14 de marzo el Secretario General de gobierno, Jesús Reyna García<sup>4</sup>, declaró el cierre de la Normal Rural y dio la orden de realizar un operativo con 40 patrullas y dos camiones de policías estatales y federales, apoyados por varios helicópteros en un primer intento por desalojar a los estudiantes que se encontraban defendiendo y resistiendo en la Normal Rural junto con maestros, padres de familia y campesinos de comunidades cercanas. El 16

<sup>4</sup> Actualmente se encuentra en la cárcel debido a sus comprobados nexos con el líder del crimen organizado Servando Gómez, “La Tuta”, quien envió a la PGJR videos probatorios de sus reuniones, de su bien documentada videoteca personal, y de igual manera involucró al hijo del gobernador priísta Fausto Vallejo, obligado a dimitir por la misma razón. Nos preguntamos: ¿entonces quién sostenía realmente intereses diferentes?

de marzo, el gobernador dio marcha atrás y aceptó el pliego petitorio sobre la convocatoria, y señaló que se establecería un intercambio en torno a los planes de estudio.

La Normal Rural de Tiripetío no tiene una extensión tan grande como otras Normales Rurales. Tiene once hectáreas, donde básicamente siembran maíz y crían conejos, cerdos y borregos; venden los conejos para obtener algunos recursos para la escuela. “La escuela está tan pobre como sus casas: apenas si tenemos unos 40 pesos por estudiante para las tres comidas y para todo lo del internado”, dice la contadora, y relata que en 2008 el deterioro de las instalaciones cobró la vida de dos estudiantes, pues su dormitorio se incendió debido a un corto circuito. “Los muchachos trataron de apagar el fuego con cubetas, pero no lo lograron y los bomberos se tardaron más de dos horas en llegar”. Los estudiantes se amontonan en pequeños cuartos de 4 x 2.5 metros, donde duermen a veces hasta ocho alumnos. Hace diez años fue la última vez que entregaron cobijas y colchones nuevos, después de una fuerte movilización en defensa de la escuela. Las instalaciones se inundan en época de lluvias, escasea el material bibliográfico y la enciclomedia no funciona más que para proyectar diapositivas.

Pero desde 1998 –año en que las autoridades trataron de cerrar la matrícula–, los estudiantes salen anualmente a defender el ingreso en la escuela, pues bien saben lo que esta posibilidad significa para sus familias y comunidades. En 2002, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, la Normal Rural permaneció doce días cercada por el ejército y la policía, pues el nieto del general Cárdenas estaba influido por el discurso prevaleciente de que la Normal Rural no estaba funcionando correctamente y ya no cubría una necesidad social, y que por lo tanto debía cerrarse. La comunidad de “Tiri” resistió y no lo permitió.

Las familias de algunos estudiantes se dedican a fabricar “yucas” o guitarritas que venden por 10 pesos; entre todos intentan hacer unas 200 por semana para obtener lo más que se pueda. Muchas veces no logran venderlas todas y de todos modos –dicen– si las lograran vender todas, ni así alcanzaría. Algunos estudiantes ya tienen hijos. La necesidad de formarse y trabajar en las comunidades es mucha. Los padres de familia hacen grandes esfuerzos para que aprovechen la escuela y puedan mejorar; por eso la defienden. El 28 de noviembre de 2008, en el marco de las movilizaciones magisteriales contra la Alianza por la Calidad de la Educación<sup>5</sup> promulgada por la dupla Calderón-

<sup>5</sup> La ACE planteó claramente, ya en sus cinco ejes, el proceso que Peña Nieto elevaría a rango constitucional, en el cual la evaluación (estandarizada

Gordillo, cientos de normalistas y policías se enfrentaron en el kilómetro 11 de la carretera Pátzcuaro-Morelia, con un saldo de decenas de lesionados, dos muy graves, 133 detenidos, dos camionetas de la procuraduría incendiadas y autobuses dañados.

“El Tiri” tiene una larga historia de lucha y resistencia, no sólo por ser la primera Normal, sino por defender su derecho a la educación y a una vida digna en el campo. Actualmente, como resultado del desalojo efectuado la madrugada del 15 de octubre de 2012 y de acuerdo con información y documentación de los estudiantes presentada al Tribunal Permanente de los Pueblos<sup>6</sup>, 157 de los estudiantes pertenecientes a las tres Normales tomadas por asalto se encuentran aún sujetos a proceso por “robo y motín”.

La Escuela Normal Indígena de Cherán (ENIM), situada también cerca de Paracho en la Meseta Purépecha, tiene por el contrario solamente 19 años de haber iniciado, esto por solicitud expresa de las comunidades indígenas de la meseta, sólidamente organizadas y con una fuerte identidad y conciencia de su papel como pueblo originario, a pesar de la merma que significa el proceso de migración. A la ENIM acuden muchachos de las cuatro regiones indígenas de otomís, mazahuas, nahuas y purépechas; ellos se asumen como parte de sus pueblos y mantienen el respeto y organización por usos y costumbres como en sus comunidades. La ENIM imparte las licenciaturas en Educación Primaria Intercultural y Bilingüe y la de Preescolar Indígena; sin embargo, al egresar sólo obtienen un reconocimiento de la SEP y no una cédula profesional, por lo cual no podrían entrar al mal llamado “concurso de oposición” y solamente podrían ejercer en las escuelas rurales indígenas. Esta escuela forma parte, junto con las siete Normales públicas que hay en Michoacán, de la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán (ONOEM), que inició una importante

e instrumentalizadora) sería el mecanismo para determinar el ingreso, permanencia y promoción del magisterio. Véase *El Cotidiano* núm. 154, marzo-abril de 2009, y núm. 179, mayo-junio de 2013.

<sup>6</sup> El Tribunal Permanente de los Pueblos es heredero del Tribunal Bertrand Russell, que fue fundado para juzgar públicamente los crímenes cometidos por el gobierno norteamericano en la Guerra de Vietnam. Posteriormente se retomó por Julio Cortázar para enjuiciar a la dictadura argentina en el año de 1978, y ahora se ha constituido en un Tribunal Permanente por la Fundación Lelio Basso. El Tribunal Permanente de los Pueblos sesionó en México entre octubre de 2011 hasta noviembre de 2014; desarrolló diez audiencias temáticas, de las cuales la última fue la de educación realizada los primeros días de octubre, precisamente en el marco de los brutales acontecimientos de Ayotzinapa, donde se presentaron sustanciales denuncias de maestros democráticos y estudiantes de todo el país.

movilización contra la reforma unilateral a los planes de estudio de todas las Normales. La ENIM presentó en un documento sus principales argumentos:

- 1) El plan de estudios implementa como obligatoria una segunda lengua, que es el inglés. Para el caso específico de nuestra Normal debería ser, en todo caso, una tercera lengua optativa, ya que para nosotros, nuestras lenguas originarias deben ser obligatorias, pues nos perfilamos como maestros de educación indígena para nuestras comunidades. Nuestras primeras lenguas son el otomí, el mazahua, el náhuatl y el purépecha, y la segunda lengua es el español. Tanto los maestros y padres de familia como los estudiantes plantean que el inglés sea opcional.
- 2) En la nueva malla curricular se da un número demasiado grande de horas para la implementación de materias como tecnologías de la información y comunicación. De entrada, no se rechaza; sin embargo, se señala que no deben prevalecer sobre otras materias, y además lo más importante es que no se pueden llevar a cabo en la ENIM, pues no se tiene la infraestructura técnica ni recursos económicos ni personal capacitado para impartirlas. Por otro lado, estas enseñanzas muy difícilmente se podrán trasladar a las escuelas básicas en las comunidades y en general en todo el estado, ya que se encuentran en un total abandono, decadencia y sin ninguna posibilidad.
- 3) La nueva malla curricular reduce el número de horas de práctica docente, que constituye un elemento fundamental en la formación del maestro, pues es el mejor mecanismo para poder aprovechar y comprender los conocimientos adquiridos al ponerlos en práctica en las comunidades.

Estos fueron los tres argumentos centrales que presentaron los alumnos de todas las Normales frente a las autoridades educativas, y que a nuestro juicio son no sólo correctas sino lógicas y evidentes. Las respuestas más directas que obtuvieron se limitaron a señalar que era de cumplimiento obligatorio e impostergable, y que si no había maestros capacitados o recursos, tenían que movilizarse y acudir a las academias de inglés y cursar las TICs en alguna universidad tecnológica. “La verdadera respuesta que se recibió fueron golpes, humillación, tortura, disparos, bombas lacrimógenas y maltrato”, relatan los estudiantes cuando más de 50 unidades del GOES y las policías estatales y federales llegaron a tomar por asalto la ENIM aquel 15 de octubre. Esa madrugada la policía sacó a toletazos a los 120 muchachos que se encontraban en la Normal; los

obligaron a tirarse al suelo en la cancha de fútbol, boca abajo con las manos atadas en la espalda, como si fueran delincuentes. En la refriega se incendiaron ocho de los 30 vehículos que los alumnos resguardaban en la Normal. Pronto corrió el estruendo a avisar a las comunidades vecinas, y pronto llegaron los pobladores y los padres de familia. Pero la Normal ya estaba cercada, no los dejaron pasar y también los golpearon. El resto de los estudiantes que no se encontraban en la Normal salieron por la mañana a cerrar la autopista Siglo XXI, a la altura de Uruapan, y detuvieron de nuevo autobuses y camiones. Cuando la policía se retiró para llevarse presos a los muchachos, los padres de familia, maestros y comuneros se quedaron a resguardar las instalaciones. El Consejo Comunal de Cherán también elevó una protesta por la invasión policiaca a su territorio, ya que están organizados autónomamente y mantienen su propio gobierno, y a través de las rondas comunitarias establecen su propia seguridad.

La misma suerte corrió la Normal de Arteaga, que en realidad es un Centro Regional de Educación Normal (CREN) para la formación de maestros de preescolar y primaria. Esta Normal está ubicada en una de las zonas más militarizadas del estado, pues es la cabeza de la región donde se ubicó la conocida organización criminal de los Caballeros Templarios, particularmente su jefe, “La Tuta”, quien por cierto es también profesor egresado de esa Normal. Todo esto genera un clima bastante complicado y peligroso para todas las escuelas que se encuentran asediadas, ya sea por el ejército y la policía o bien por las bandas criminales. A pesar de la situación en que se encuentran, los estudiantes de la Normal participaron en las actividades y movilizaciones relativas al pliego petitorio; sin embargo, cuando los policías irrumpieron en la Normal, optaron por abandonar la escuela.

## **El rencor de Peña Nieto: la Normal Rural de Tenerife**

Ocho grandes fogatas arrojan la luz naranja chisporroteante sobre la entrada y las esquinas de la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río, que se encuentra en la población de Tenerife. Las llamas se reflejan sobre las blancas paredes del viejo casco; se meten por los arcos de la entrada y los murales adquieren reflejos sorprendentes. Hay estudiantes de guardia vigilando, haciendo rondines, esperando en torno y dentro de la Normal Rural; hay también campesinos de las comunidades cercanas. Es el 29 de septiembre de 2008. La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de

México<sup>7</sup> (FECSM) ha estado movilizadas; todas las Normales Rurales han participado, junto con los maestros democráticos, en las diferentes protestas contra las arbitrarias medidas de la ACE que se pretenden aplicar a rajatabla. La situación en Tenerife es muy peligrosa. Al frente se encuentra una gran manta que dice: “Mientras la pobreza exista, las Normales Rurales tendrán razón de ser”.

En marzo de ese año, el 12 y el 24 de abril, los estudiantes de Tenerife habían logrado firmar un acuerdo importante con las autoridades mediante minutas que suscribieron las Normales Rurales y los responsables de los Servicios Integrales de Educación del Estado de México (SEIEM), que garantizaban el nuevo ingreso y la correspondiente convocatoria, las plazas de maestros rurales para los 128 egresados de ese año y el sostenimiento del presupuesto. Los estudiantes estaban movilizados porque ya desde mayo de 2007, el gobernador Peña Nieto había cancelado la matrícula de ingreso en 18 de las 36 Normales del estado<sup>8</sup>. No había pasado ni un mes de la firma de las minutas cuando Peña Nieto ya estaba declarando que se había firmado la ACE, y que por lo tanto quedaban anulados los acuerdos anteriores; planteó que se cancelaban los puestos de trabajo para los maestros rurales y que los egresados de la Normal Rural debían presentar el concurso de oposición establecido por la ACE. Los responsables de SEIEM —particularmente su director general, Rogelio Tinoco García—<sup>9</sup> expresó que solamente los estudiantes de la Normal Rural, como siempre inconformes, habían objetado el examen de oposición: “ningún otro de los 5 mil 600 egresados de educación superior, ni siquiera de la UPN”, y al ser confrontado sobre su compromiso de sostener las 128 plazas de maestros rurales y señalar que ellos habían firmado las minutas, se declaró totalmente incompetente e imposibilitado para cumplirlos.

Los normalistas iniciaron una serie de paros escalonados hasta llegar a una huelga en el mes de agosto, cuando en medio de una mesa de diálogo sostenida en las propias

oficinas de la SEIEM las autoridades rodearon estas instalaciones con granaderos para amedrentar y coaccionar a la comisión de normalistas. Las autoridades exigieron la renuncia del director y el subdirector de la Normal, Lázaro Montes y Carlos Bazaldúa, por “desobediencia a la autoridad, por no gobernar a los estudiantes, por no respetar el calendario escolar”, en el sentido de impedir a toda costa el cierre de la Normal. La tensión crecía día a día; los estudiantes se organizaron en grupos que salieron a “capturar” vehículos de todo tipo, camionetas repartidoras de Bimbo, Lala, Barcel, Marinela, La Costeña, Jumex, Ricolino, hasta camiones de Coca-Cola, Pepsi, remolques y automotores, y cuarenta autobuses de pasajeros, todos resguardados en la Normal Rural junto con cinco pipas de gas y diésel para garantizar una presión fuerte sobre las autoridades y exigir el cumplimiento de las minutas firmadas. El domingo 14 de septiembre, un helicóptero sobrevoló varias veces la escuela a menos de 30 metros de altura, fotografiando y tomando videos. Dos horas después, 400 granaderos se apostaron a 100 metros de la entrada con instrucciones de desalojar la Normal, sin presentar ninguna orden judicial de desalojo. Los campesinos habitantes de los cinco pueblos cercanos a Tenerife, Cruz Vidriada, San Simonito, San Simón el Alto, Tecomatlán y dos colonias de Tenancingo se movilizaron rápidamente y se pusieron como barricada humana frente a los granaderos, que tuvieron que retirarse.

Ese 29 de septiembre por la tarde, los gerentes locales de las transnacionales y de las empresas nacionales llegaron a la Normal Rural a negociar directamente la entrega de sus unidades; los estudiantes les plantearon que no pretendían hacer ningún daño a las unidades, pero que solamente las liberarían tras la reanudación del diálogo con el gobierno y la SEIEM. Dos de los empresarios —Bimbo y Marinela— de regreso a Toluca interpusieron una demanda en la PGJEM por el delito de robo, y convocaron provocadoramente a la autoridad a recuperar sus vehículos.

En la Normal se encontraban cerca de 1200 normalistas, 650 de ellos convocados por la FECSM de otras Normales. Había algunas barricadas y campesinos de las comunidades cercanas. A lo largo de la huelga se habían desarrollado muchas actividades culturales que convocaron a la población y a padres de familia; la Normal Rural está siempre llena, alerta, movilizadas, protegida. Finalmente en la madrugada llegó la propuesta del gobernador Peña Nieto de reestablecer el diálogo; los estudiantes analizan el planteamiento y su decisión es realizar una gran movilización para acudir a la sesión de negociación, sin descuidar

<sup>7</sup> La FECSM fue constituida en junio de 1935, al calor del fortalecimiento de las organizaciones campesinas.

<sup>8</sup> *Contra línea*, octubre de 2008.

<sup>9</sup> Resulta interesante comentar, en primer lugar, que las convocatorias al concurso de oposición en ese momento no estaban abiertas a todos los egresados universitarios por el perfil docente de educación básica que se requería, y en segundo lugar que el 22 de noviembre de 2014 fue nombrado subsecretario de educación básica de la SEP el ingeniero civil A. Curi Naime, quien reemplazó al “desgastado” Tinoco al frente de la SEIEM en 2009. Parece que Peña mantiene sus lealtades al equipo del Estado de México.

la vigilancia de la Normal. Salen 30 autobuses llenos y se dirigen a la casa de la cultura de Tenerife. Finalmente los estudiantes logran una gran victoria: se respetarán las minutas firmadas en cuanto a la matrícula de ingreso, a las plazas de maestros, al presupuesto y no se cerrará el internado. Los estudiantes entregan los vehículos pero con astuta previsión: ya habían puesto a resguardo los productos que, de acuerdo con una democrática decisión de asamblea popular, serían repartidos el 1 de octubre a la población más pobre cercana a Tenerife: una verdadera peregrinación de mujeres y niños invadió la Normal Rural. Fue un día de fiesta. Se levantó la huelga, pero los estudiantes tomaron precauciones, no confiaban y estaban aún vigentes las averiguaciones previas por el delito de robo. No habría garantías para los siguientes años, en que los estudiantes tendrían que movilizarse de nueva cuenta.

La Escuela Normal Rural de Tenerife fue creada en 1927; tiene unas 48 hectáreas para cultivo con siembra de maíz y flores. Tienen también conejos, cerdos, caballos y ovejas. Para ingresar, tradicionalmente se había realizado un examen de admisión interno y una entrevista para garantizar que los más pobres fueran los que ingresaran. Quieren mantener su educación multidisciplinaria, sus talleres agrícolas, su lengua indígena, su internado y sus plazas de maestros rurales. Todo esto va en contra del perfil que hoy día les ha asignado la SEP: “las Normales Rurales deben promover una formación integral de docentes a través de planes y programas de estudio de licenciatura que sean capaces de incorporar oportunamente, para beneficio de sus alumnos y de la sociedad, los descubrimientos e innovaciones científico-tecnológicas del entorno”. Esto contradice lo establecido en la actual Reforma Educativa de Peña Nieto, quien seguramente varias veces pensó con resentimiento en la Normal de Tenerife mientras promulgaba las nuevas leyes educativas.

## **Mactumactzá: una derrota para las Normales Rurales**

Desde temprano, a la entrada de la Normal Rural de Mactumactzá en Chiapas, en el kilómetro 2 de la carretera a Chicoasén, hay una larga fila de jóvenes. Son hijos de campesinos; la mayoría son indígenas y vienen de diferentes regiones de Chiapas, de las comunidades más pobres. Pasaron casi toda la noche en las bancas de la escuela: están esperando entrar a las aulas para realizar el examen de ingreso. Sólo hay 60 lugares.

El 6 de agosto de 2003, la historia de Mactumactzá se detuvo. Los normalistas le llamaron “el macanazo”: entraron a la Normal cerca de 2 mil policías y a macanazo limpio sacaron a todos los estudiantes. Se llevaron presos a más de 200 alumnos y padres de familia, y fueron golpeados y aventados en los camiones. Al día siguiente, el gobernador Pablo Salazar Mendiguchea dio la orden de demoler con trascabos el dormitorio, los lavaderos, la cocina y el comedor. De esta manera se terminaba, sin consideración alguna, con la petición de los estudiantes por el presupuesto, la alimentación, el internado y también por la matrícula, ya que se determinó que de 527 alumnos que ingresaban se reduciría a 240, y año con año ésta iría menguando. La gestión de Salazar Mendiguchea, que había llegado a la gubernatura con la aureola de ser un activo defensor de los Acuerdos de San Andrés como miembro de la CONAIE, resultó incluso más perjudicial para la Normal Rural que la de sus antecesores; se alineó directamente con Osorio Chong, quien estaba logrando el cierre de la Normal de “El Mexe”, algo que el chiapaneco no logró pero sí le asestó un golpe demoledor.

Los 240 estudiantes que continúan en la Normal luchan cotidianamente por sobrevivir. En el viejo comedor solamente quedan los murales que representan la matanza de Tlatelolco en 1968; en los dormitorios sólo están las varillas metálicas que sujetaban las esteras de las camas; los alumnos alcanzaron a rescatar algunos colchones que utilizan para dormir en el piso, y se heredan de generación en generación; las canchas de fútbol y de basquetbol están cuarteadas; la alberca está clausurada y destruida. Las 27 hectáreas que conforman la Normal Rural están prácticamente abandonadas, pues el sistema de producción agropecuaria no se ha podido levantar. Las porquerizas, las colmenas, las aves de corral, el maíz, el frijol, todo se terminó; incluso se eliminó del plan de estudios el eje que corresponde a los módulos de producción agropecuaria que existen en todas las Normales Rurales desde su fundación<sup>10</sup>.

El plan de estudios de las Normales Rurales ha incluido cinco ejes en su proyecto de formación integral: 1) el académico, que incluye todos los procesos teóricos-prácticos de su preparación como docentes rurales y que debe responder a los planteamientos centrales formulados por la SEP. En realidad, actualmente este es el único eje del que se ocupan institucionalmente las autoridades educativas y que

<sup>10</sup> *Observatorio Ciudadano*, <escrutiniopublico.blogspot.mx>, 26 de julio de 2009. *La Jornada*, 20 de abril de 2008.

se empeñan en homologar con el resto de las Normales; 2) el de producción agropecuaria, que siempre cumplió la función de preparar a los maestros rurales para dominar técnicas de producción —tradicionales y nuevas— que pudieran llevar a sus comunidades para mejorar e incrementar el rendimiento agrícola, y donde además las escuelas rurales tienen —aunque abandonadas— parcelas escolares donadas por los ejidos; 3) el eje cultural y de oficios, integrado por múltiples talleres fundamentales en una preparación integral; 4) el eje deportivo, para lo cual las Normales Rurales tuvieron instalaciones deportivas pertinentes; 5) el eje político, a cargo de la FECSUM, donde los estudiantes analizan los procesos sociales, económicos y políticos del país, lo cual los prepara para trabajar en sus comunidades rurales —que se encuentran aisladas y sin mayor información que la ofrecida por la televisión— para, como dicen ellos, “abrir las mentes de los campesinos” frente a la desigualdad y la injusticia, y esto los convierte automáticamente en agentes o sujetos del cambio social.

La Normal Rural de Mactumactzá fue creada en el estado más pobre de México el 24 de febrero de 1931, un año difícil que aún resentía los efectos de la gran crisis económica, y se fundó con la intención de dar respuesta a una enorme necesidad popular. Es entonces inconcebible la ceguera de los gobiernos estatales que pretenden cerrar este pequeño espacio en el estado que sigue siendo el más pobre y que aún tiene al 60% de su población en el campo y donde existe el mayor porcentaje de indígenas del país. En la campaña electoral de Sabines, muchas fueron las promesas de ampliar la matrícula, de reinstalar el internado, de apoyar, entre otros compromisos, y fueron ocho grandes incumplimientos. Los muchachos siguen luchando día a día.

## **Una Normal Rural a contracorriente: la Emiliano Zapata de Amilcingo**

A finales de los años sesenta y principios de los setenta se cerraron diecinueve Normales Rurales y la mayoría fueron convertidas en escuelas secundarias y bachilleratos técnicos<sup>11</sup>. En el estado de Morelos, en 1969, se cerró la

<sup>11</sup> Algunos autores contabilizan 14 Normales Rurales cerradas durante este lapso, y otros refieren 19 escuelas. En términos generales, se sabe que de 36 Normales Rurales que existían sólo quedaron 17, y después del cierre de El Mexe, Hidalgo, actualmente quedan 16. El gobierno de Díaz Ordaz, bajo el manto del IV Congreso Nacional de Educación Normal que decretó la separación de la secundaria de las Normales, declaró la transformación de éstas en secundarias técnicas. Frente a la movilización

Normal de Cuernavaca o Palmira<sup>12</sup>, fundada en 1937. El argumento que expuso Echeverría en aquellos años fue que en el campo mexicano hacían falta técnicos agrícolas y tractores, no maestros y libros. Sin embargo, cinco años después los pobladores de Amilcingo, Jantetelco, Amayuca, Joncatepec y varias comunidades ubicadas en las faldas del volcán Popocatepetl fundaron —ellos mismos— su nueva Normal Rural, y la llamaron Emiliano Zapata, en la tradición morelense.

En Amilcingo se inició, en 1972, un movimiento popular que buscó dar alternativas a los jóvenes de la región que, una vez terminada la secundaria, no tenían mayor opción que emigrar a Estados Unidos o al Distrito Federal. Al principio, el movimiento se focalizó en la escuela primaria, impulsado fuertemente por la directora Eva Rivera, quien junto con el maestro Vinh Flores —graduado de la Normal Superior de México (ENS)— promovió como remedio la creación de una Normal Rural. Fueron apoyados activamente por Nabor Barrera, presidente municipal, y Benedicto Rosales, presidente del Comisariado Ejidal. Esta iniciativa se expandió por la región y fue aglutinando a varios de los poblados; su consolidación creció paulatinamente y el compromiso de sostener el anhelo popular determinó la fundación de la Normal Rural en 1973.

Al principio, las clases se daban en los patios de las casas, en la cancha de basquetbol del pueblo, o en el propio patio de la escuela primaria; los maestros eran estudiantes voluntarios de la ENS y de la UNAM, que apoyaron el proyecto y dormían y almorzaban en las casas de los vecinos. Se implementaron jornadas de trabajo voluntario entre alumnos y maestros para hacer el aseo en la escuela, cultivar las parcelas, limpiar el pueblo. Además, todos participaron en marchas y movilizaciones, luchando por el reconocimiento de su Normal.

En 1974 era tal la fuerza acumulada, que se realizaron diferentes acciones. La más significativa fue la Marcha

de las Normales Rurales se ejerció una represión extrema, se utilizó a la CNC para tomar varias Normales Rurales, y otras fueron sitiadas y tomadas por el ejército y la policía. Muchos de sus estudiantes y maestros fueron asesinados, desaparecidos, encarcelados o corrompidos durante los años de la Guerra Sucia, particularmente en Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Morelos y en los estados donde hubiera una fuerte movilización campesina. En 1972 se reconfiguró la FCSM y celebró su Congreso Nacional Reconstituyente en la Normal Rural de Tenerife.

<sup>12</sup> Esta Normal, como muchas otras, fue migrando a varios lugares. Estuvo muy poco tiempo en Cuernavaca y pasó a Oaxtepec, al convento de los dominicos; posteriormente, en 1944 quedó en la Hacienda de Palmira.

Nacional Campesina y Obrera, que se desplegó en el marco de la reconstitución de las Normales Rurales que se reorganizaban<sup>13</sup> después de una brutal represión. Bravo Ahuja, secretario de Educación Pública, finalmente aceptó la oficialización de la nueva Normal, nacida a contracorriente por la tenacidad y voluntad de las comunidades del volcán. Los habitantes de Amilcingo donaron un terreno bastante grande—de 40 hectáreas— para la construcción de la escuela. Sin embargo, la venganza oficial no se hizo esperar: en 1976 fueron emboscados y asesinados, en diferentes lugares, el maestro Vinh Flores, Nabor Barrera y Benedicto Rosales, y nunca se encontraron los ejecutores ni los responsables; la maestra Eva Rivera fue trasladada a una escuela lejana. Hoy día sus rostros dominan los murales de la escuela: son la herencia y el compromiso de las estudiantes de Amilcingo, pues la Normal Rural es para mujeres.

Todos los fines de semana se organizan guardias para que la escuela no esté sola, pues las alumnas temen que las instalaciones sean tomadas y cerradas por las autoridades. “Si se cierra la Normal, nos quedamos sin ninguna opción o posibilidad de estudio, y entonces las opciones de vida que hay son las del trabajo doméstico en casas ajenas, en los hoteles, o migrar”. Ellas defienden su derecho a estudiar, ya que para la mujer del campo la situación es mucho más difícil que para los hombres: vienen de comunidades en donde aún predomina la injusticia, el hambre y el despojo. Cada año, sostener la posibilidad del ingreso a la Normal y luego al magisterio en el estado de Morelos es una verdadera pelea. Cada año, los estudiantes se organizan y salen hasta Cuernavaca para pelear por sus derechos. En varias ocasiones les han propinado “tremendas golpizas y corretizas”. Han tenido algunas huelgas exitosas cuyo logro es la ampliación de su matrícula, y en otros casos han sido severamente reprimidos por el propio ejército, que tomó varias poblaciones. Un ejemplo de esto ocurrió en 2008, durante las luchas contra la ACE, cuando se sumaron activamente a esa enorme movilización de los maestros morelenses; fue un verdadero levantamiento popular que sacudió a todo el estado durante más de dos meses y que desconoció a los dirigentes espurios del SNTE mientras se sostenía una huelga prolongada<sup>14</sup>. Actualmente, las muchachas acompañan el movimiento contra la construcción de la termoeléctrica en el municipio de Temoac, así como

sus compañeros de Ayotzinapa se manifestaron contra la construcción de la presa La Parota.

Las maestras y la propia directora señalan que las alumnas son quienes hacen todas las gestiones frente a los gobiernos del estado, las que se presentan a debatir los planes de estudio, las que argumentan en defensa de sus características y expectativas de formación profesional. “Nada se les ha regalado a estas estudiantes que saben organizarse y movilizarse rápidamente en comisiones a Cuernavaca, al Distrito Federal o hacia otras Normales”. La Normal tiene huertas de higueras y ciruelos, con lo que fabrican dulces que después salen a vender; cultivan también maíz, sorgo y limón, y cuidan de sus chivos. Ellas compran las lámparas, mantienen los jardines y la pintura de la escuela. Si no alcanza con su trabajo, salen a botear a la carretera y piden apoyo solidario de los vecinos. Cuando salen a realizar las prácticas docentes tienen que comprar todo su material, pues en las escuelas sólo cuentan con enciclopedia—en el mejor de los casos— y nada más. La Normal está tan escasa de recursos, que las alumnas de primer ingreso generalmente duermen en el suelo. A pesar de todo esto, ellas se sienten profundamente orgullosas de su escuela, de su futuro como maestras y de que tal vez—sólo tal vez— logren una vida diferente para ellas y sus niños.

## Ayotzinapa: símbolo y condensación

A través de estos brochazos que reflejan a unas cuantas Normales Rurales, he querido perfilar los elementos característicos que acompañan su permanente lucha y resistencia. Cualquiera que se asome a la historia de las Normales Rurales, ya sea cotidiana o en la perspectiva de su función social educativo-histórica, puede percibir inmediatamente que son el mejor reflejo del conjunto de las luchas campesinas por la defensa de sus derechos básicos, siempre al filo de ser eliminados y acallados. Son parte ineludible de la historia del siglo XX mexicano, historia que han protagonizado los hombres del campo a sangre y fuego. A pesar de todos los intentos que han hecho los gobiernos de la burguesía rentista que domina al país por eliminar ese “lastre” que jalona la falsa modernización capitalista, a pesar de la enorme descomposición que la narco-política ha impuesto, a pesar de la enorme fila de migrantes que todos los años emprenden el camino hacia el norte, los hombres y mujeres que siembran la tierra siguen ahí, tercamente siguen ahí y defienden sus escuelas que sienten suyas, que son parte de eso—tan poquito— que les queda.

<sup>13</sup> Ricardo Amann, *Observatorio Educat*, vol. V, enero de 2005.

<sup>14</sup> *Contralínea*, marzo de 2008.

Las Normales Rurales son también, y por otro lado, parte de esa constante lucha del magisterio democrático que se niega a ser avasallado por una visión tecnocrática que instrumentaliza la educación, que la empobrece, que la mercantiliza y la privatiza. Son entonces reflejo de esa tenaz batalla por defender la educación pública, humanista, laica, gratuita, equitativa, multicultural y pública que muchos queremos. Responden a dos frentes de lucha que han construido una historia de permanente movilización como ningún otro sector del país.

Los estudiantes de las Normales Rurales han salido cada año —prácticamente desde los años cuarenta— para exigir que sus comedores y sus internados se sostengan con un mínimo aceptable; para demandar que se les den materiales didácticos, recursos para sus prácticas docentes, bibliotecas y herramientas de trabajo para el campo. Cuando los sucesivos gobiernos decidieron implementar, como estrategia de desgaste, el recorte a los presupuestos y dejar las Normales al abandono, los estudiantes empezaron a movilizarse sistemáticamente. Las demandas elementales tuvieron como respuesta la molestia y la represión. Las comunidades se unieron apoyándolos, y a su vez los normalistas se solidarizaron en las demandas campesinas. La escalada de este proceso corrió a cargo del Estado mexicano, que ha ejercido la misma política —en los diversos sexenios— desde hace décadas, y que optó por criminalizar a las Normales Rurales y a sus comunidades campesinas para justificar el uso de la violencia contra ellas.

Muchas de las grandes movilizaciones de las Normales Rurales —sobre todo en los últimos años— han tenido como motivo la exigencia de un espacio de debate frente a las reformas curriculares impuestas unilateralmente, y que de acuerdo con los normalistas trasgreden y desmantelan las principales características de la formación docente rural, esencia de su vocación en la búsqueda de una reinserción útil a sus comunidades. Las demandas están orientadas a impedir el cierre y desaparición de uno de los escasos espacios de formación integral que tienen los hijos de campesinos pobres. Hace muchos años que el Estado decidió constituir el CONAFE para capacitar, en cursitos de dos o tres meses, a otros muchachos de las comunidades, egresados de secundaria, y enviarlos con esa preparación a las escuelitas indígenas y comunitarias multigrado pagándoles un salario mínimo. Esta es la solución despectiva que el Estado ha implementado para las comunidades campesinas pobres, y por eso afirma que no se requieren más maestros.

Las Normales Rurales defienden, junto con los maestros democráticos, una escuela que el Estado se ha empeña-

do en eliminar desde los años noventa bajo el falso discurso de la calidad, la evaluación, la eficiencia y la competitividad, cuando lo que realmente ha atinado a hacer son las pruebas estandarizadas de aplicación censal, instrumentalizadoras del aprendizaje, cuyo único resultado son los inmensos listados del “ranking” por escuela y alumno<sup>15</sup>. La resistencia del magisterio democrático y las Normales Rurales a las reformas “modernizadoras” ha sido tenaz; por eso los gobiernos se han ensañado ferozmente contra ellas.

La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fue fundada en 1926. Fue una de las primeras y su historia corre paralela a la de otras Normales Rurales; tal vez cada una de ellas añade al repertorio de demandas y tácticas de movilización común los elementos característicos de su estado, entre los que pueden distinguirse la presencia de caciques y terratenientes que ejercen violencia local en mayor o menor grado, el nivel de corrupción y el compromiso que las fuerzas locales tienen con el crimen organizado, la conformación de gobiernos más represores e intolerantes, así como las características del movimiento campesino, su capacidad de organización y respuesta, su dimensión social y demandas, su confrontación con las fuerzas campesinas priistas, todo lo cual moldea también las luchas de resistencia de las Normales Rurales. Por esto, la Normal Rural de Ayotzinapa está inmersa en la trágica historia de Guerrero, escenario central de la Guerra Sucia que no ha cesado desde los años setenta, ahora desplegada bajo el manto de la militarización y el supuesto combate (en realidad es complicidad) al crimen organizado. Guerrero es un territorio atravesado por una lacerante pobreza, y está sembrado de viudas y huérfanos; se caracteriza por la migración, el tráfico de armas, las bandas, los secuestros impunes, las autoridades delincuenciales. Guerrero es un territorio donde los pueblos se organizan en autodefensas, en asambleas comunitarias, en grandes movilizaciones y luchas históricas.

La Normal Rural de Ayotzinapa se ha distinguido por la actividad política de sus estudiantes. En 1941 se registró la primera gran huelga, y en ese año el gobierno del estado y el propio director de la Normal, Carlos Pérez Guerrero, iniciaron una feroz campaña al grito de “¡comunistas!”. Pidieron la intervención de la fuerza judicial para depurar la escuela y acusaron a los normalistas de apátridas. En 1960, los estudiantes fueron brutalmente hostigados por participar en la manifestación popular que exigió la destitución

<sup>15</sup> Véase Navarro, César (coord.) (2011). *El secuestro de la Educación*. México: UPN-La Jornada.

del gobernador Raúl Caballero Aburto, quien fue responsable del asesinato de 18 civiles y del encarcelamiento de 400 personas durante un mitin que se realizaba frente al palacio municipal de Chilpancingo, evento durante el cual los batallones 6° y 24° de infantería arremetieron contra la multitud. Esta Normal Rural y el movimiento popular campesino han sobrevivido a caciques asesinos como los Figueroa, señores “de horca y cuchillo” como bien se dice, ensañados ciegameamente contra ellos. Los estudiantes de Ayotzinapa y sus padres, sus maestros y sus comunidades sostienen la dignidad necesaria.

Frente a todo esto, parece casi imposible pensar que han logrado subsistir y que son capaces de seguir defendiendo un proyecto educativo con profundo carácter social y compromiso con sus pueblos, y que han mantenido su organización, disciplina, disposición y responsabilidad a lo largo de tantos años. Como siempre, el Estado y los medios de comunicación los acusan de “tener oscuros intereses ajenos”, cuando se demuestra claramente que son justamente las autoridades las que están perfectamente coludidas y fusionadas con intereses totalmente ajenos al bienestar ciudadano, que sólo mantienen constancia y determinación frente a los intereses monetarios que las benefician.

Esta demostración no sólo se ha hecho clara y pública frente a los hechos de Ayotzinapa: ha estado siempre ahí bajo el manto protector mediático e institucional, solamente que en esta ocasión la desmedida dimensión de barbarie ha alcanzado el nivel más alto de las instituciones del Estado mexicano. Cuando los normalistas se manifiestan, se suman a las demandas campesinas, piden debatir sus planes de estudio o apoyan las causas de la defensa del medio ambiente, entonces tienen “oscuros intereses ajenos” y cualquier acción que se tome para rescatar a la patria mancillada se justifica. Esta es la aberrante idea de propaganda mediática que ha empleado el Estado mexicano y todos sus voceros.

El constante proceso de criminalización y denostación sostenido durante décadas por el Estado mexicano, secundado por la dirigencia corrupta del SNTE y amplificado a través de un vocerío irrefrenable de los medios, ha llevado directamente a este crimen irreparable. El sistema de partidos, estrechamente compenetrados por los intereses electorales y de utilización del presupuesto público y consolidados mediante el “Pacto de operatividad” que siguen manteniendo, ha evitado que los congresos o las comisiones de derechos humanos o alguna instancia jurídica, legal o

ejecutiva enfrenten la responsabilidad que tienen ante el crimen de lesa humanidad que han perpetrado. Nadie en el gobierno ha podido siquiera esbozar una respuesta coherente ni mucho menos desplegar las acciones correspondientes. Peña Nieto ha anunciado que se tomarán medidas tajantes para detener el proceso de descomposición; entre ellas, las más relevantes son retomar la creación del mando único policial, una nueva centralización burocrática y una nueva Ley contra la penetración del crimen organizado en los municipios, medidas que son totalmente ineficientes y absurdas. Como si no fuera evidente que coludirse con la delincuencia es un delito que se debe perseguir y castigar en cualquier circunstancia, estas medidas son de repercusión mediática y ajenas a la realidad.

En el colmo del cinismo, la SEP ha anunciado que está dando las instrucciones para que a los padres de familia de los desaparecidos se les conceda una “beca de estudios para que culminen su primaria, secundaria o el nivel medio superior o superior”. El indignante montaje de la Procuraduría General de Justicia es la muestra más palpable de la incapacidad del Estado para medir las consecuencias y responsabilidades que debe asumir. ¿Acaso creen realmente que el pueblo aceptaría esa versión burda narrada por tres “sicarios” del último peldaño, que acusan a un tal “Pato” de ordenar la ejecución y quema de los cadáveres en circunstancias totalmente improbables? El montaje tenía como objetivo convencernos de que este fue un homicidio ejecutado por el crimen organizado, el cual había penetrado sólo a las autoridades del nivel municipal.

Sin embargo, nadie ha creído esta patraña porque tenemos todavía muchas preguntas: ¿acaso las autoridades e instituciones involucradas “por comisión u omisión” en este bestial hecho en Iguala y en Guerrero no forman parte del Estado mexicano? ¿Cuántos presidentes municipales, autoridades diversas, gobernadores, jueces, policías y ejército en Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, Estado de México, Veracruz y el resto del país no están coludidos con el “crimen organizado”—en realidad organizado *con, por y para* los diferentes niveles del Estado—? ¿Quién es realmente responsable de esos cientos de fosas y cadáveres sin nombre que aparecen constantemente desde hace años? ¿Quién es responsable de las acciones que han arrojado miles de muertes consignadas como “daños colaterales” a manos del ejército y de policías? ¿Quién es responsable de la absoluta impunidad frente a miles de víctimas, mujeres, niños, hombres, ancianos, migrantes? ¿Qué justicia existe para los padres de la guardería ABC, frente al derrame de

toneladas de contaminantes en los ríos, ante los asesinatos de líderes comunitarios, frente a los fraudes descomunales? Y la pregunta más acuciante hoy en día: ¿dónde están los 43 muchachos? Estas son las preguntas que nos hacemos desde hace años; no son nuevas, son siempre las mismas y la única diferencia es que el número de las víctimas crece. Si el Estado no es responsable, entonces no cumple función alguna frente a la sociedad: esta es la conclusión que se abre paso en las mentes de muchos.

El espanto que han vivido los padres de los desaparecidos se ha apoderado de todos. En algunos de nosotros se manifiesta como una enorme rabia, en otros como asombro, incredulidad incluso, y en algunos como temor hacia la tempestad que la ira por la dignidad violentada puede levantar. Bien dice el dicho popular: “El que siembra vientos, cosecha tempestades”. Hoy en día, después de más de cincuenta jornadas infructuosas de marchas y demandas frente al montaje gubernamental, la irritación se vuelca a las calles. La insurgencia cívica apenas empieza, encabezada por los movimientos sociales de Guerrero. Cada día que pasa sin respuestas ciertas, aumenta el coraje. Las comunidades guerrerenses han decidido reforzar y profundizar sus procesos de autogobierno; se han creado ya cinco comités municipales y se fortalece la constitución de sus policías comunitarias. Al mismo tiempo se ha levantado un importante movimiento estudiantil a lo largo del país<sup>16</sup>.

Las “buenas conciencias” de algunos que al principio aparecieron conmovidos frente a las pantallas, frente a los padres de familia, frente a los estudiantes, frente a la dimensión del crimen, empiezan a tambalearse, empiezan a deslindarse de las víctimas: vuelven a su manoseado discurso de la legalidad, del Estado de Derecho y de la no-violencia. Olvidan fácilmente que fueron ellos mismos los que desataron la ilegalidad y la violencia en el grado más bárbaro; olvidan que el último dato real y documentado sobre la desaparición de los normalistas es que los subieron a las patrullas de policía. Los comentaristas televisivos regresan fácilmente a la nota roja: “¡actos vandálicos se están realizando en Chilpancingo!”, inculpan impunemente a los “violentos e incontrolables estudiantes normalistas”. Muy poco falta para que olviden totalmente las causas brutales, casi inimaginables, que han llevado a estos actos. *Milenio*, *Televisa* y hasta *Canal 11* encabezan esta andanada que pontifica diariamente sobre los actos y las marchas “correctas” frente a las “transgresoras”, lavándose las manos

de toda la enorme responsabilidad que tienen al realizar campañas sistemáticas de acusaciones y linchamiento contra los normalistas rurales, los maestros democráticos, las organizaciones comunitarias y los movimientos sociales desde hace años.

No le exigen con esa misma voz al gobierno; son parte del entramado oficial y están conscientemente atizando contra las movilizaciones. Se trajo al escenario el viejo fantasma díazordacista de la supuesta “desestabilización” del país, que permitiría utilizar la “violencia legítima del Estado”, pues no se toleraría el uso de la violencia por parte de los que denuncian el uso desmedido e ilegal de la violencia del Estado.

Las primeras Normales Rurales están muy cerca de cumplir su centenario. Han sido cien años difíciles, duros, enriquecedores y sustanciales en los que se sumaron a las luchas más emblemáticas de los campesinos, de los estudiantes, de los maestros, de los pobres. Son cien años de resistencia sostenida para defender un proyecto utópico, en el que los hombres de la tierra serían verdaderamente libres y alcanzarían una vida digna. Son cien años de luchar por su sobrevivencia, y hoy en día son acompañados por grandes sectores de la población en esta tarea. Se han convertido en símbolo y condensación de las luchas del pueblo mexicano por cien años.

## Bibliografía

- Calderón López Velarde, Jaime (1982). *La Escuela Normal Rural: crisis y papel político (1940-1980)*, Tesis profesional, ENAH.
- Carmona, Fernando (1969). “Desarrollo y reforma educativa”. *La educación: historia, obstáculos y perspectivas*. México: Nuestro Tiempo.
- Coll Lebedeff, Tatiana (2009). “Una Alianza por la Calidad, o el reiterado fracaso y fraude de la evaluación”. *El Cotidiano* núm. 154, marzo-abril.
- Coll Lebedeff, Tatiana (2013). “La reforma educativa, el poder del Estado y la evaluación”. *El Cotidiano* núm. 179, mayo-junio.
- Coll Lebedeff, Tatiana (2014). “Resistencia y desobediencia magisterial contra la Reforma Educativa”. *Revista Pueblo Unido* núm. 8.
- Navarro Gallegos, César (coord.) (2011). *El secuestro de la educación. El sexenio educativo de Elba Esther Gordillo y Felipe Calderón*. México: UPN-La Jornada.
- Téllez Pérez, Adriana (2005). *Un panorama histórico del normalismo rural*, Tesis profesional, UAM Iztapalapa.

<sup>16</sup> *La Jornada*, 1 de diciembre de 2014.